



¿Un “Plan Colombia” para los problemas de Afganistán?

Jorrit Kamminga

Colaboraciones n° 1833

18 de julio de 2007

Colombia y Afganistán comparten mucho: pobreza, narcotráfico, violencia política, secuestros y actos de terrorismo. En ambos países, existen lazos profundos entre la clase política y el tráfico de estupefacientes. Específicamente, las dos naciones están luchando contra el narcotráfico y la insurgencia: en Colombia principalmente la cocaína y grupos armados como la FARC; en Afganistán el opio y el Talibán resurgente. Además, los dos países reciben mucho apoyo político y militar de Estados Unidos.

Con el reciente traslado a Afganistán de William Wood, embajador de Estados Unidos en Colombia entre 2003 y 2007, Washington quiere reforzar la idea que los problemas del país surasiático se puedan resolver con instrumentos y estrategias ya implementadas en Colombia. El “caso Colombia” está presentado por Colombia y los Estados Unidos como un ejemplo ilustrativo para el

Gobierno afgano.

Colombia empezó tener relaciones más estrechas con Afganistán desde el año 2005, especialmente en el terreno de intercambios entre las fuerzas policiales. En julio de ese año, el ex ministro afgano para asuntos narcóticos Habibullah Qaderi visitó Bogotá para intercambiar opiniones sobre las maneras más eficaces de combatir el cultivo de amapola y la producción de opio. En agosto del 2006, los primeros policías colombianos expertos en la lucha contra las drogas realizaron un recorrido por Afganistán para asesorar a las autoridades afganas. La primera etapa del programa de intercambio entre Colombia y Afganistán terminó el pasado 14 de junio.

Colombia ya está luchando contra los cultivos ilegales desde los años 70, primero contra la marihuana, después desde los años 80 principalmente contra el cultivo de coca.

Año tras año, el Estado colombiano fumigó por vía aérea miles de hectáreas de coca con el fin de reducir la oferta de cocaína. Sin embargo, más de treinta años después, podemos concluir que la política antidroga de Colombia ha sido un fracaso total. Basta mirar al año pasado. Según datos oficiales de los Estados Unidos, el cultivo de la coca creció un 9 por ciento en el año 2006. El área bajo cultivación se extendió a casi 160.000 hectáreas – comparable con unas 165.000 hectáreas de amapola que tenía Afganistán en el mismo año. Mientras Afganistán produjo una cantidad récord de 6.100 toneladas de opio – un 92 por ciento de la producción mundial – Colombia sigue cultivando 70 por ciento de la coca en el mundo.

La falta de resultados en Colombia es sorprendente, especialmente porque el país dispone desde el año 2000 de un ambicioso “Plan Colombia” financiado en gran parte por el gobierno de los Estados Unidos. Dicho Plan avaló la fumigación de más de un millón de hectáreas en Colombia sin resultado ninguno. La fumigación masiva no ha logrado contener el cultivo de la coca a pesar de más de 10 mil millones de dólares gastados en ella. En respuesta a la política antidroga del estado, los cocaleros han replantado sus cultivos en zonas nuevas o benefician de cultivos más productivos. Para colmo, si ya había una reducción pequeña del cultivo en Colombia, la producción en Bolivia y Perú aumenta, manteniendo la producción global estable año tras año. El precio de la cocaína en los Estados Unidos – el mercado principal – está estable

o incluso está bajando – en contradicción con la teoría que la destrucción de la coca subiría el precio de la cocaína y así reduciría el consumo.

La razón principal por la falta de resultados es la incapacidad de entender que en el fondo el problema de las drogas es un problema de carácter económico. Los agricultores pobres seguirán cultivando coca, marihuana u opio mientras no disponen de alternativas legales sostenibles. Además, mientras hay una demanda de drogas en el mundo, siempre habrá un sitio donde se cultiva las plantas asociadas – normalmente un país o una región donde el control y la legitimidad del gobierno y las fuerzas de seguridad están ausentes o no muy reconocidas.

Aunque Colombia y Afganistán tengan mucho en común, cuando evaluamos la política de drogas en Colombia, vemos que no puede ser un ejemplo de seguir para Afganistán. Sí, puede servir como ejemplo negativo para no repetir errores en el país surasiático. En Afganistán, el gobierno y la mayoría de los países de la coalición internacional hasta ahora se han opuesto con éxito a las fumigaciones. Sin embargo, el gobierno estadounidense sigue apostando por la implantación de un “Plan Colombia” en Afganistán con fumigaciones masivas por vía aérea. Los Estados Unidos financian el Ministerio de Interior afgano que es responsable de la erradicación de la amapola en Afganistán pero todavía no han logrado convencer al resto de los países donantes ni al Presidente Karzai de la necesidad de fumigaciones. Dichas fumigaciones

serían desastrosas para Afganistán. Más de tres millones de personas dependen directamente del cultivo de la amapola – solo la punta del iceberg de una industria ilegal que equivale a 60 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) afgano. En comparación, en Colombia la industria de la hoja de coca y sus derivados “sólo” representa un 0.5 por ciento del PIB colombiano.

En conclusión, lo que necesita Afganistán no es un “Plan Colombia” sino un programa estructural de desarrollo sostenible para las zonas rurales que dependen casi por completo del cultivo de la amapola. Por

ejemplo, en la provincia sureña de Helmand, un 88 por ciento de las familias dependen del opio. Esta provincia produce un 40 por ciento de todo el opio en el mundo. El cultivo en las provincias “españolas” está estable (Herat) o en aumento (Badghis) con un 56 por ciento de los pueblos involucrados. La situación de pobreza extrema, desempleo estructural y la falta de infraestructura necesaria para la introducción de cultivos legales, rentables y sostenibles no se soluciona con políticas agresivas como la fumigación de la amapola o la erradicación manual de los cultivos de agricultores pobres.

Jorrit Kamminga es jefe de investigación del Consejo de Senlis en Kabul, Afganistán. En este momento está haciendo una encuesta de opiniones en las provincias de Helmand y Kandahar sobre la insurgencia actual de los talibanes.